

Amplían intervención de JAPDEVA

El Gobierno amplió la intervención en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) por seis meses más, informó ayer a La Nación el Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

Aseguró que la medida la tomó el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias, por considerar que los seis meses de interventoría en la entidad, los cuales vencieron ayer, no son suficientes para lograr una reestructuración efectiva.

A la comisión fiscalizadora, que estaba constituida por seis personas, fue integrado un nuevo miembro, el Lic. Fernando Soley Soler, según se indica en el decreto que firmó el Dr. Oscar Arias el lunes pasado, junto con el titular de la Presidencia y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Ing. Guillermo Constenla.

Entrevistado ayer al respecto, el presidente de la Junta Interventora, Ing. José Manuel Agüero, manifestó que la prórroga, además de ser un apoyo a la labor que vienen ejecutando, es un "visto bueno" a lo logrado.

Declaró que en esta segunda etapa se abocarán a buscar la solución del gran problema de pobreza existente en la vertiente atlántica, así como aspectos de carácter administrativo de la institución.

Advertió que en los últimos seis meses han logrado poner en marcha el 95 por ciento de los



El Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias, aseguró ayer que la intervención en JAPDEVA se amplió por seis meses más para lograr una mejor reestructuración.

programas que se fijaron, pero algunos requieren seguimiento e impulso para quedar incorporados en las labores normales de JAPDEVA.

Fue el 22 de octubre de 1986 cuando se decretó la intervención en la entidad, por considerar que los objetivos que la originaron no los cumplía a cabalidad.

La entonces junta directiva, en pleno, fue separada del cargo en forma temporal e, incluso, el Dr. Roger Churnside, quien era el presidente ejecutivo, fue nombrado embajador en Jamaica.

Un año

Con el decreto firmado por el Presidente de la República, la interventoría en JAPDEVA se mantendrá por un año y no se descarta que el nuevo presidente ejecutivo sea el Ing. José Manuel Agüero, según se rumoró en la Casa Presidencial hace pocas semanas.

El funcionario manifestó que "definitivamente el plazo de seis meses es muy corto para lo mucho que hay que hacer en cambios y transformaciones", por lo cual se mostró satisfecho con la prórroga por igual periodo.

Al referirse al nuevo directorio del sindicato de la institución, los instó a colaborar en la reestructuración, puesto que estima que "está cerrado al diálogo".



El jefe de la misión del Banco Mundial, Luis Ernesto Derbez, y la economista costarricense, Lidia Silvia Saborio, llegaron procedentes de Washington.

Banco Mundial dará hoy opiniones sobre ajuste

Los dos voceros del Banco Mundial que llegaron ayer al país comunicarán al Poder Ejecutivo, esta mañana, las opiniones de la entidad sobre el plan de ajuste estructural que propuso el Gobierno.

La iniciativa fue presentada recientemente en Washington por el primer Vicepresidente de la República, Ing. Jorge Manuel Dengo, y otros miembros del equipo económico del Gobierno.

Ayer por la tarde llegó el jefe de la misión, Luis Ernesto Derbez, y por la noche esperaban a George Park.

Al mexicano Derbez lo acompañó en su viaje desde Washington la Licda. Silvia Saborio, economista costarricense que actúa como asesora.

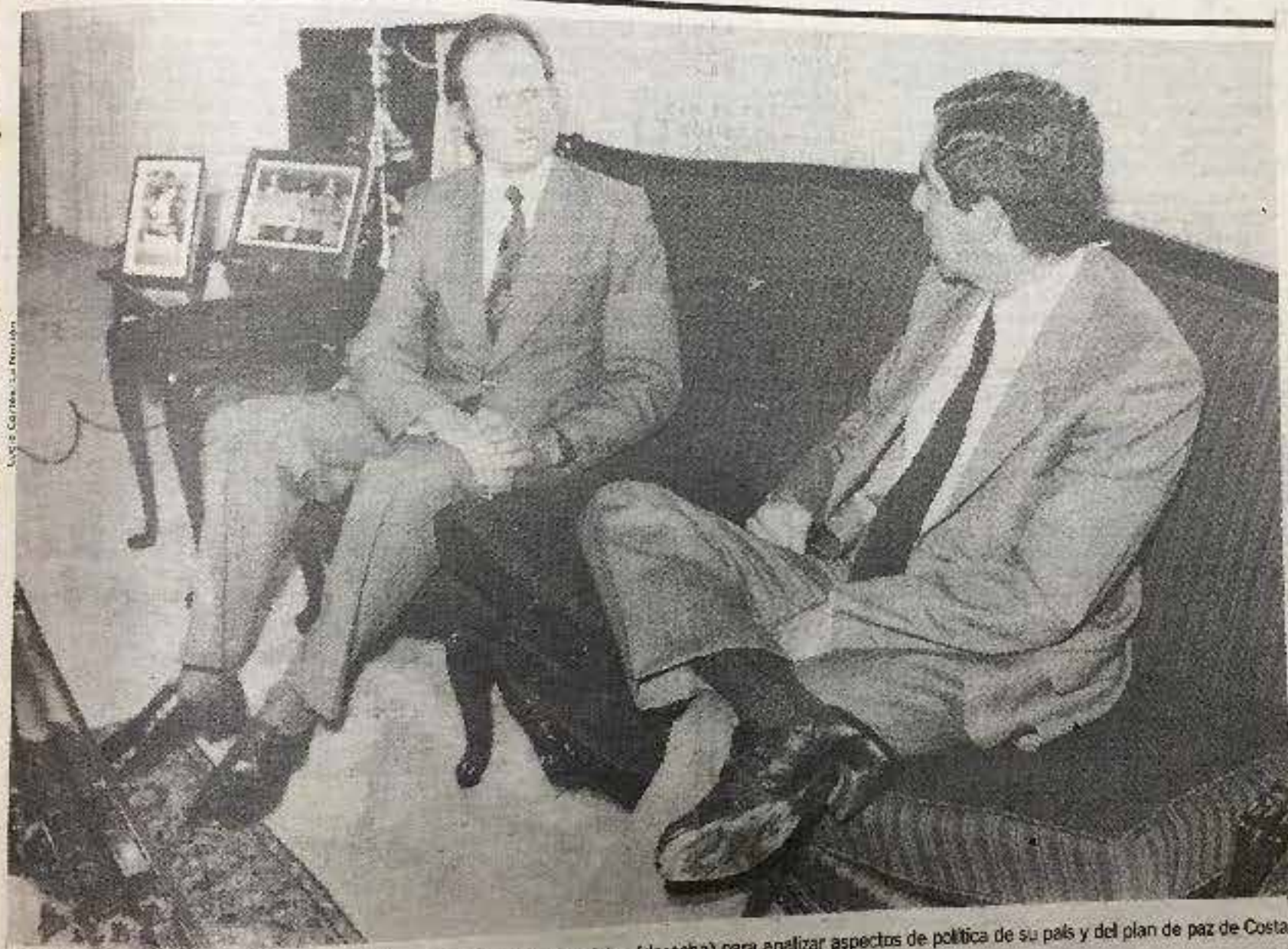
Derbez y Park integran un primer grupo que definirá con autoridades nacionales el marco de las conversaciones siguientes, más detalladas y prolongadas, que se efectuarán el 18 de mayo próximo con una segunda misión del Banco.

Derbez, según informó la Licda. Saborio, es el oficial de más alto rango enviado por el Banco para las negociaciones con nuestro país.

El Gobierno se propone realizar modificaciones en la estructura de los sectores público, financiero y productivos para las que necesita financiamiento. Si se llega a un arreglo con la institución, está haría un préstamo de unos \$200 millones. Consultado sobre esa suma, Derbez dijo que por ahora no hay nada fijado, aunque si podría estar listo eso dentro de unos ocho días.

En los últimos días, funcionarios gubernamentales han manifestado interés por conocer las condiciones que pedirá el Banco.

El jefe de la misión manifestó que ellos no imponen reglas; no especifican lo que se debe hacer. Las autoridades del país determinan qué hacer y definen cómo alcanzar esas metas. El Banco, según con términos mutuamente convenidos, interviene entonces en el financiamiento.



El embajador soviético, Yuri Pavlov, se reunió ayer con el presidente Arias (derecha) para analizar aspectos de política de su país y del plan de paz de Costa Rica.

Gabinete analizó caso de INCOFER

El Consejo de Gobierno analizó ayer la situación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), donde se producen pérdidas mensuales por un monto de \$50 millones.

Sin embargo, no tomó ningún acuerdo al respecto, ante la ausencia del Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, quien no asistió a la sesión de ayer por encontrarse indisputado, según dijo una fuente, que no supo precisar por qué.

que se debe tomar medidas lo antes posible para solucionar el problema.

Por la tarde el mandatario llegó a la Casa Presidencial, donde atendió varias audiencias, entre ellas, una con el embajador soviético, Yuri Pavlov, y el Lic. Hugo Alfonso Muñoz, quien se menciona como candidato a Contralor General de la República.

A su salida del encuentro con Arias, el diplomático aseguró que informó al Gobernante de la política de desarme de su país y analizaron el

Sobre este punto, afirmó que apoyan cualquier gestión que tienda a lograr la paz negociada en el istmo.

Anunció, además, que en las próximas semanas podría llegar al país el jefe de la Cancillería soviética para asuntos de América Latina, aunque precisó la fecha.

Al ser cuestionado sobre una eventual mediación de su Gobierno ante Nicaragua, para que retire la demanda que interpuso en la Corte Internacional de Justicia contra Costa Rica, negó tal posibilidad.

Por su parte, el Lic. Hugo Alfonso Muñoz afirmó que el objetivo de su reunión con Arias era el de presentarse como delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de desaparecidos en Honduras.

Negó haber hablado sobre su posible candidatura a Contralor General de la cual han hablado algunos diputados, según admitió.

Mortalidad infantil en el istmo por cada mil niños que nacen vivos

Guatemala	58
Honduras	68
El Salvador	58
Nicaragua	61
Costa Rica	13,7
Panamá	23



Costa Rica es uno de los países con mejores índices de salud, pero esconde bolsones de miseria que deben recibir asistencia.

Reunión de ministros de Centroamérica y Panamá

Piden racionalizar recursos para salud

MARIA ISABEL SOLIS
Redactora de La Nación

La representante para Costa Rica de la UNICEF, Lidia Athenia Montejo, sostuvo ayer que hubo receptividad por parte de los delegados de las diversas agencias financieras al pedido de ayuda de los ministros de Salud y Educación de la región, pero que es indispensable un uso más racional de los recursos.

Manifestó que no se puede esperar que todo quede solventado tras una reunión y enfatizó que ayer los 14 titulares de Educación y de Salud se comprometieron a dar seguimiento a los programas infantiles. Asimismo, se externó la necesidad de seguir coordinando planes y el establecimiento de puntos de convergencia entre los estados.

La urgencia de seguir asistiendo a los pobla-

dores de los bolsones de miseria en Centroamérica y Panamá plantearon ayer los ministros mencionados, durante una reunión que empezó el miércoles en el hotel Fiesta, de Puntarenas, y concluye hoy.

De acuerdo con las exposiciones hechas por los países participantes, se constató que hay diferencias acerca de las condiciones que afronta cada uno, pero aún hay estados, como Costa Rica —que posee uno de los mejores índices sanitarios—, con zonas de pobreza muy por debajo de los niveles del resto de la población.

La funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —UNICEF, según las siglas en inglés— expresó que hay centroamericanos seriamente perjudicados con los Programas de Ajuste Estructural (PAE). Agregó que la organización está apoyando el financiamiento de grandes proyectos, entre ellos la atención primaria, la educación para el desarrollo, el

agua potable y el saneamiento ambiental.

Los representantes del área procuran convencer a las entidades financieras de Estados Unidos y de Europa de que la región necesita del soporte financiero para continuar desarrollando ciertos programas vitales para la educación y la salud.

Para algunas naciones, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, disminuir la cooperación internacional tendría efectos catastróficos, pues un gran porcentaje de sus programas son financiados mediante la ayuda externa.

El Arzobispo de El Salvador, monseñor Gregorio Rosa y Chávez, expuso ayer sobre los principales problemas que padecen los niños centroamericanos. Cada una de las naciones expondrá hoy su situación individual, con excepción de Panamá, que lo hizo ayer.

Empleados piden salvamento de ferrocarril

Incierto futuro de INCOFER

JORGE SOLORZANO
Redactor de La Nación

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles aportará una cuota de casi 1.500 de los 6.500 burocratas que se pretende trasladar hacia el sector privado, pero hasta ayer los empleados de INCOFER ignoraban cómo se reducirá el 63 por ciento del personal.

Sus dirigentes laborales temen que esto signifique la liquidación de la actividad ferroviaria en el país.

La institución diariamente pierde entre \$1 millón y \$2 millones, pues es deficitaria en sus servicios, salvo el de carga de banano, en el tramo Línea Vieja-Siquirres.

"Aceptamos la reducción de personal y otros aspectos, pero queremos que el Gobierno salve el ferrocarril. Se puede firmar contratos con la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) y otras compañías que trabajan en Limón; incluso, podríamos dar un día de trabajo gratis

para que ese dinero se invierta", afirmó don Omar Mena, presidente de la Asociación Solidaria de Empleados de Ferrocarriles.

Sector privado

Mientras que la Cámara de Comercio había anunciado que el sector privado no estaba en capacidad de absorber la mano de obra que quedaría cesante, el Ing. Rodolfo Castro, presidente de la de Exportadores, sostuvo que su sector está preparado para abrir nuevas oportunidades de empleo.

Similar criterio emitió el Lic. Carlos Alvarado, presidente de la Cámara de Finanzas, Inversiones y Crédito (CANAFIC). Ambos destacaron la necesidad de las medidas, aunque reconocieron que son un "trago amargo".

Sin embargo, el jefe del Departamento Legal del Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME), don Carlos Manuel Cornejo, resistió ayer la oposición total de ese sector a la reducción de 860 empleados —posi-

blemente cocineras de esos locales— en la Dirección de Asignaciones Familiares.

La polémica en torno al plan de movilidad social trascendió también al ámbito político, cuando los diputados Oscar Soley y Rodrigo Gutiérrez, de los partidos Liberación Nacional y Pueblo Unido, criticaron el plan. Acusaron al Gobierno de no hallar "un norte seguro" y agregaron que las medidas sólo producirán desocupación y pobreza en las capas medias.

Esto fue refutado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Juan José Trejos, quien consideró que no queda más opción que trasladar mano de obra del sector público al privado, porque la inflación será muy alta si se continúa la política de emitir bonos para pagar salarios.

Los sindicatos del sector público adoptarán medidas de presión contra el plan, las cuales darán inicio el 9 de noviembre, con una marcha nacional contra el costo de la vida y las decisiones anunciadas.

Confuso incidente en Casa de Gobierno

Disputa entre asesor presidencial y regidor

NICOLAS AGUILAR R.
Redactor de La Nación

La cotidiana tranquilidad de un miércoles en Casa Presidencial fue rota lentamente el miércoles anterior por un confuso incidente entre el jefe de delegados presidenciales, don Marco Aurelio Castro Castro, y el regidor socialcristiano de Tibás, don Luis Alberto Vargas Araya.

Ese día, según fuentes de la Casa de Gobierno, el señor Castro llamó a su oficina al dirigente tibasense y, tras cerrar la puerta, le increpó actuaciones supuestas en el municipio. Poco después, supuestamente al calor de la discusión, el funcionario presidencial lo habría golpeado varias veces, ocasionándole diversas lesiones.

El señor Vargas Araya, quien labora en la oficina de Monitoreo de la sede presidencial, fue incapacitado durante tres días.

Los pormenores de la disputa trascendieron avanzada la tarde de ayer, y aunque La Nación intentó conocer la versión del señor Castro, en su despacho dijeron que se encontraba en una gira fuera de San José.

Por su parte, el señor Vargas Araya confirmó anoche telefónicamente lo ocurrido, pero no quiso entrar en detalles por recomendación de su abogado —al que no identificó— y porque "el Señor Presidente sale mañana del país —hoy—, lo que podría prestarse para malas interpretaciones".

Varios regidores oficialistas se reunieron anoche en la clínica de Tibás para analizar lo sucedido y esperarán el regreso del mandatario, Lic. Rafael Calderón Fournier, previsto para el 18 de noviembre —de un viaje por Estados Unidos, Taiwán y Japón— para solicitarle "medidas disciplinarias contra don Marco Aurelio Castro".

Así lo advirtió el presidente municipal de Tibás, don Gilbert Villalobos Villalobos, quien atribuyó lo ocurrido a su compañero a serias divergencias en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Anoche se procuró conocer la opinión del presidente Calderón, pero en su residencia no fue posible localizarlo, ya que estaba despidiéndose de unos familiares, según se dijo.

Los problemas mencionados por el señor Villalobos se remontan al 16 de junio, cuando fue elegido como ejecutivo municipal don Willie Villalobos —quien no era el candidato designado por el PUSC— con el voto de cuatro regidores del Partido Liberación Nacional (PLN) y uno del oficialista, Mario Fonseca Ulloa. Sus compañeros de agrupación lo acusaron de "aliarse a los intereses verdiblanco".

Desde entonces persisten los enfrentamientos. Incluso, casi todos los ediles del PUSC se mantienen aún alejados de las sesiones del Concejo.

Los regidores socialcristianos de Tibás pedirán al presidente Rafael Ángel Calderón Fournier sanciones contra el jefe de delegados presidenciales, don Marco Aurelio Castro Castro.



Reclama casa y \$500 mil

Ortega no indemnizó a viuda de policía tico

● Alega engaño de comandante del EPS

ARMANDO MAYORGA

Redactor de La Nación

Los vecinos del barrio le dicen la "millonaria". Pese a sus explicaciones, casi ninguno cree su versión de que todavía es pobre y de que no ha recibido ninguna "fortuna" del comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, general Humberto Ortega Saavedra.

Cómo le iban a dar crédito, si la prensa publicó en agosto y en boca del propio militar nicaragüense, que él la indemnizó por la muerte de su esposo, el guardia civil José Jiménez Rodríguez, asesinado la madrugada del 23 de diciembre de 1969.

Doña María Luisa Pérez Amores, de 48 años, sostuvo que "fui vilmente burlada y manipulada" y denunció que casi fue "forzada" por representantes de Ortega a firmar un documen-

to en que desistía de la demanda de \$10 millones, aunque sin recibir nada a cambio.

Ahora, es poco lo que puede hacer. El caso está prescrito. Sólo está atendida a que el comandante nicaragüense oiga su súplica para obtener una casa y \$500 mil, actualmente vive en el INVU Las Cañas, en Alajuela, con las mismas penurias que sufre desde la muerte de su esposo.

Esto sucedió durante un asalto de un comando sandinista —encabezado por Ortega— a la Comandancia de Alajuela, con el fin de liberar a Carlos Fonseca Amador, en ese entonces líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Jiménez Rodríguez, que vigilaba el lugar, murió cuando intentó detener a los guerrilleros.

Ortega fue condenado en ausencia a cumplir 16 años de cárcel, pero el Gobierno del Lic. Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) lo indultó de la pena en 1980, poco después de que asumiera la comandancia del EPS. Posteriormente, el abogado Anselmo Pérez Castro presentó la querrela de resarcimiento, que tramitaba el Juzgado Primero Civil de Puntarenas.

Acuerdo incumplido

Ante el mismo juzgado y bajo el asesoramiento del Lic. Guido Arturo Peñaranda Segreda, la señora Pérez Amores testificó por escrito, el pasado 16 de octubre —La Nación obtuvo una copia—, que ella estuvo transando con delegados de Ortega un acuerdo extrajudicial.

"Debo decir —declaró— que no fue cumplido el acuerdo, pues luego de reiteradas visitas de sus representantes para presionarme a hacer un arreglo extrajudicial y desistir de la demanda, llegó a tal punto la presión de parte de ellos que me vi forzada a firmar un pequeño documento que, según ellos, era solamente para dejarlo entrar en el país. El acuerdo era que cuando él estuviera aquí, me pagaría las sumas cobradas en la demanda.

"Cual fue mi sorpresa —le dice al juez— cuando me di cuenta de que realizó su rápida visita a nuestro país y regresó inmediatamente a Nicaragua, no sin antes haberse publicado en los periódicos que me había pagado la suma de

\$10 millones, cosa que es absolutamente absurda, risible y que es consecuencia de la manipulación de que fui objeto por parte de sus representantes."

El 31 de julio, luego de participar en una reunión de la comisión contrabandista de delegados gubernamentales que se encargó de verificar la seguridad entre los estados, Saavedra dijo a La Nación que había renunciado a doña María Luisa. Sin embargo, esa oportunidad no precisó el monto, pero dijo que sus abogados se habían encargado de hacerlo.

"Yo —dijo el comandante— he tratado de hacerle ver a ella la calidad humana y revolucionaria nuestra y el problema político que se dio; a partir de esa comprensión profunda, no ha considerado necesario mantener una demanda."

Ahora, al verse sin posibilidad de obtener un juicio y sin dinero, doña María Luisa resumió al juez de instrucción su situación: dejaron sin el santo y sin la limosna.

Investigación contra funcionarios de Aduana Descubren contrabando millonario de mercadería

YANANCY NOGUERA C.

Redactor de La Nación

Un contrabando millonario de mercancías en que supuestamente se violaron los procedimientos de desalmacenaje y se habría sobornado a empleados de la Aduana Central, descubrió el Ministerio de Hacienda.

Una fuente de confianza, que prefirió no ser identificada, comentó que la investigación iniciada por Hacienda en setiembre concluye hace tres días. El Ministerio Público iniciará en los próximos días la denuncia por escrito.

Según conoció este diario, la mercancía pudo haber ingresado en el país amparada en el guía de redestino, por medio de la cual los productos se envían directamente de la zona de Limón a la Aduana Central, en Cahalícos, pero al llegar aquí aparentemente se trasladada a un almacén de depósito, donde se rotos los marchamos (sellos que protegen cajas) y descargada la mercadería.

Llevar al almacén de depósito la mercancía pudo haber sido uno de los procedimientos anormales, pues debía ser enviada al almacén fiscal para ser revisada. Además, supuestamente se rompieron los sellos sin la debida autorización y al parecer se ofreció dinero a funcionarios de Aduanas para "extraviar" los documentos que amparaban la mercadería.

El Ministerio de Hacienda tiene que revelar los nombres de los funcionarios públicos involucrados con el supuesto fraude.

La fuente aseguró que una sola empresa ocultó la mercancía, pero prefirió no suministrar el nombre mientras no se presente la denuncia ante el Ministerio Público. Además, dijo que tienen los nombres de quienes realizaron los sobornos.

Otros detalles, como el tipo y valor de la mercadería, así como la forma en que se descubrió las anomalías, no serán revelados sino hasta que el Ministerio Público termine su investigación.



Archivo / La Nación

Debe \$700 millones a la Caja

Objetan presupuesto de INCOFER

RONALD MOYA CHACON

Redactor de La Nación

La Contraloría no aprobó el presupuesto por \$897 millones del INCOFER, correspondiente al segundo semestre de 1990, debido a que la entidad adeuda \$700 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por cuotas obrero patronales.

Así lo comunicó la entidad fiscalizadora en una carta enviada el 3 de octubre al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y dada a conocer ayer por el presidente de la entidad, Ing. Guillermo Ruiz.

Este contratiempo surge en momentos en que INCOFER realiza esfuerzos por superar un déficit de cerca de \$600 millones anuales que la obligó a plantear en forma inmediata la reducción de servicios y de personal.

Ayer en horas de la tarde las autoridades de la institución y de la Caja iniciaron conversaciones para buscar un arreglo de pago, según expli-

có a La Nación el presidente de la institución.

No fue posible consultar al Dr. Salomón Rodríguez, gerente administrativo de la CCSS, acerca de las negociaciones.

La Contraloría condicionó la aprobación del plan de gastos hasta tanto la entidad ferroviaria no adquiriera un compromiso formal de pago, el cual deberá darse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Aunque Ruiz prefirió no adelantar detalles referentes al tipo de arreglo que se intenta lograr con la Caja, dijo estar seguro que la solución surgirá en próximas horas, toda vez que la institución no puede postergar el cumplimiento de sus obligaciones.

Al descartar una posible paralización de trenes, el funcionario dijo que la decisión de la Contraloría no inhibe a INCOFER de realizar los gastos de operación que sean necesarios, siempre y cuando se mantengan las conversaciones con el Seguro Social, con el fin de llegar a un acuerdo.

La crisis financiera que vive INCOFER los obligó a reducir el servicio de trenes.

Reducción de servicios

Dentro de las medidas para solucionar la crisis financiera que padece el INCOFER está la reducción del servicio de trenes: el ferrocarril del Pacífico sólo hará dos recorridos diarios de ida y vuelta entre San José y Puntarenas. Los fines de semana se mantendrán los cuatro servicios que hasta el momento se realizaban diariamente.

En relación con el ferrocarril al Atlántico —suspendido por los deslizamientos en Chiz de Turrialba— se determinó eliminar el servicio de pasajeros entre Cartago y Siquirres y poner a funcionar ferrobuses (buses con ruedas de hierro), y en los lugares que aún requieran del tren, para salir a los centros de población, el MOPT se comprometió a construir vías para que los vecinos no queden incomunicados.

INCOFER dispuso poner en ejecución un plan para reducir el personal de esa entidad en unas 600 plazas, para lo cual se le dará la oportunidad a los trabajadores de acogerse a sus prestaciones.

IGNACIO SANTOS PRESENTA HOY: LA BRUJERÍA ESTÁ VIVA EN COSTA RICA

¿Qué efectos sufren las personas que la practican? ¿Qué piensa la Iglesia de la Brujería?



REPORTAJE ESPECIAL